



La consulta plantea cuáles habrán de ser las consecuencias, desde el punto de vista de la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de las posibles solicitudes de baja que pudieran presentar los interesados que previamente hubieran prestado su consentimiento para la incorporación de sus datos al fichero de perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.

Como punto de partida, cabe recordar que conforme establece el Anexo de la Orden JUS 2146/2012, de 1 de octubre, el tratamiento de los datos contenidos en el mencionado fichero se fundará únicamente en el consentimiento de los interesados.

A tal efecto, desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos, la solicitud de baja a la que se refiere la consulta constituirá un supuesto de revocación del consentimiento previamente prestado por el interesado para que tenga lugar el citado tratamiento.

La revocación del consentimiento aparece recogida en el artículo 17 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, disponiendo el apartado 1 del mismo que “El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y que no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento. En particular, se considerará ajustado al presente Reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento o la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido” y añadiendo que “No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste adicional al interesado”.

Las consecuencias de la revocación a la que acaba de hacerse referencia se recogen en los restantes apartados del precepto. Así, en primer lugar en lo relativo al tratamiento llevado a cabo por el responsable, el artículo 17.3 dispone que “El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento, sin perjuicio de su obligación de bloquear los datos



conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Asimismo, el apartado 3 del precepto dispone que “Cuando el interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la confirmación del cese en el tratamiento de sus datos, éste deberá responder expresamente a la solicitud”.

Por último, el apartado 4 del artículo 17 añade que “si los datos hubieran sido cedidos previamente, el responsable del tratamiento, una vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los cesionarios, en el plazo previsto en el apartado 2, para que éstos, cesen en el tratamiento de los datos en caso de que aún lo mantuvieran, conforme al artículo 16.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Es la última de las previsiones la que pudiera plantear más problemas en el supuesto objeto de análisis en el presente informe, por cuanto la finalidad misma del fichero consiste en la contrastación de los perfiles genéticos del interesado que hubiera prestado el consentimiento objeto de revocación con los datos que ya hubieran sido incorporados a la base de datos, a fin de determinarse la existencia de vínculos genéticos entre los interesados, facilitándose esa información a aquéllos con los que pudiera existir la coincidencia.

No obstante, debe recordarse que el artículo 6.3 establece que “el consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos”. De este modo, las cesiones de datos que hubieran tenido lugar con anterioridad al momento en el que el interesado tomase la decisión de revocar el consentimiento previamente prestado desplegarían todos sus efectos y deberán reputarse válidas. Ello implica que las acciones judiciales que pudieran haberse iniciado con anterioridad al momento de revocación del consentimiento sobre la base de una cesión de datos previamente consentida por el interesado podrán lógicamente proseguir, sin que pueda considerarse posible la anulación de la prueba aportada sobre la base del perfil objeto de previa cesión consentida por el interesado.

En este sentido se pronuncia precisamente la cláusula de consentimiento para el tratamiento de los datos en el fichero al que venimos haciendo referencia en este informe, contenida en la Orden JUS/2146/2012. Dicha cláusula incorpora, en primer lugar, un consentimiento del interesado para la cesión de los datos correspondientes a su perfil genético en caso de presentarse una coincidencia, al indicar que el interesado “consiente que, en caso de producirse las coincidencias a las que anteriormente se ha hecho referencia, sus datos identificativos sean comunicados a las personas con las que guarde relación genética”.



Igualmente, se pone de manifiesto que pese a a que el interesado puede ejercitar su derecho a revocar el consentimiento previamente prestado dicha revocación no afecta a los supuestos en los que los datos hayan sido objeto de cesión como consecuencia del consentimiento al que acaba de hacerse referencia, al carecer dicho consentimiento de efectos retroactivos. Así se indica que “En todo caso usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado por medio del presente formulario, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, ante el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, calle José Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente), Parque Empresarial, 28232, Las Rozas, Madrid. No obstante, se le advierte de que los datos obtenidos o los que resulten de las eventuales averiguaciones o investigaciones podrán constituir un principio de prueba de las posibles demandas de reclamación o impugnación de la filiación que puedan ejercitarse, en su caso, ante los Juzgados y Tribunales”.

A la vista de todo lo señalado hasta este lugar, debe concluirse que la revocación a la que se refiere la consulta implicará que se produzca el cese en el tratamiento de los datos desde el momento en que la revocación se produzca, no pudiendo ya los datos ser objeto de cesión, pero no afectará a las cesiones que ya se hubiesen llevado a cabo ni a sus consecuencias procesales, al carecer la revocación de efectos retroactivos.